

Es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado.  
» **Voltaire** (1694-1778) Filósofo y escritor francés

Gracias a la libertad de expresión hoy ya es posible decir que un gobernante es un inútil sin que nos pase nada. Al gobernante tampoco.

**Jaume Perich:** Escritor, dibujante y humorista español popularmente conocido como "el Perich".

Cuando los hombres honrados se van a su casa, los pillos entran en la de gobierno.  
**Domingo Faustino Sarmiento**

## PROBLEMAS DEL AGUA EN TUCUMÁN - ¿ATRAPADOS SIN SALIDA?

A la luz de la evolución de los problemas del agua en Tucumán en el último medio siglo, pareciera que nunca tendrán solución o que no se resolverán al ritmo de los que se van generando por el crecimiento demográfico y del sistema productivo. No porque sean técnicamente imposibles de resolver (a veces ello ocurre), sino porque la sociedad, sus instituciones y el sistema productivo han llegado a una situación de total incapacidad para afrontar sus crecientes y agudos problemas, al menos en una perspectiva de tiempo razonable, por ejemplo en las próximas dos a tres décadas. Lo dramático es que la mayor parte de la sociedad y de los tomadores de decisiones no tiene conciencia de sus limitaciones y se debate entre reclamos sociales y promesas de soluciones que no llegarán.

¿Cuáles son los principales problemas del agua en la provincia? Enunciamos los más imperiosos, no todos. Suficiente para exponer el estigma a que se enfrenta la sociedad, ya que exhiben las causas y los resultados de la elocuente incapacidad de quienes desarrollaron la provincia en su tramo de historia más sustancial: los últimos sesenta, setenta años.

Los más graves y urgentes problemas del agua son los servicios de saneamiento para la población (agua potable y cloacas) y las inundaciones. Dejamos a un lado otros aspectos muy importantes como el abastecimiento para la producción agrícola e industrial y los problemas de contaminación de las aguas, que hacen al desarrollo económico y a la calidad ambiental, si alguna vez se quisiera buscarlos seriamente, como estrategia política.

En la base: Tucumán es una provincia pobre, decididamente pobre. Más allá de las estadísticas económicas, la sola observación de su geografía muestra la abundancia de las carencias y de la miseria. A lo largo de su historia, no se logró que su sistema productivo y sus enormes riquezas naturales sirvieran para asegurar trabajo, ingreso y condiciones mínimas de bienestar al grueso de una población permanentemente creciente en un espacio geográfico reducido. Por el contrario, el hacinamiento en ciudades caóticamente expandidas, con malos servicios de agua y cloacas, con basura esparcida por todos sus rincones, pésimos servicios de transporte, etc., fueron la consecuencia de procesos de empobrecimiento y de degradación social sin pausas desde ya hace muchas décadas. Empobrecimiento que se acumuló y evidenció en la creciente cantidad de asentamientos irregulares y villas miseria periurbanas, donde la pobreza, la marginalidad y el delito componen una sinfonía perfecta de la desolación. Eso sí:

con redes de agua potable que pierden más agua de la que entregan y cloacas que desbordan excretas por las calles. Escenario elocuente de los problemas del agua que padece la provincia.

Sería materia para sociólogos y politólogos analizar por qué la provincia llegó a ese cuadro actual. Quizás esas disciplinas sean las más esenciales para ayudar a dilucidar la base de nuestros problemas a fin de esbozar alguna propuesta esperanzadora para generaciones jóvenes. Por de pronto, algunos rasgos del valioso Tucumán histórico han mostrado su insuficiencia o irrelevancia para generar algún liderazgo sectorial en aquella necesaria dirección.

Por ejemplo: Tucumán brilló, dentro de la Argentina, como polo cultural a lo largo del siglo XX. Con cuatro universidades, prolífica actividad cultural y artística y destacados intelectuales, no generó centros de estudios para sus principales problemas y desafíos. Cada institución y sus protagonistas se desarrollaron en burbujas aisladas, pugnando por prevalecer o sobrevivir atendiendo a sus restringidos o exclusivos intereses y conveniencias en un mercado nacional o provincial también mediocres y pobres de oportunidades. Dentro de ellas, quienes se destacaron sólo pudieron crecer y desarrollarse abandonando Tucumán, y son valorados en otras geografías mucho más que en su propia tierra. En Tucumán abundan los trovadores y artistas que denuncian la pobreza, también los ajenos a la realidad, pero no se forjaron elites políticas ni aristocracias con capacidad de liderazgo transformador.

Como producto del lento proceso de degradación global, la aristocracia, es decir “los destacados” en la escala social, independientemente del mérito para ello, está formada por empresarios prósperos que hicieron buenos negocios, no necesariamente con buenas artes, funcionarios públicos que arriban a esos niveles en busca de apetencias económicas o de poder personal desmedidas, una corona de colgados del poder, oportunistas de empleo bien remunerado y una clase política mediocre, sin ideas estratégicas ni interés por un mejor futuro para el conjunto social.

El sistema político y de gobierno está estructurado por poderes públicos determinados por hombres de leyes con una visión puramente jurídico-legal de la sociedad y del sistema social. No existe una tecnocracia de poder o de gobierno que dé o procure una impronta mínima de eficiencia a la resolución de los problemas del desarrollo económico y social. Las estructuras de gobierno fueron moldeadas atendiendo a formalismos legales sin ninguna preocupación por lograr eficacia en el manejo de Estado ni en el funcionamiento de la sociedad. En las etapas populistas, el “redistribucionismo” sirvió de máscara para estratos de políticos que coparon el poder sin otra pretensión que permanecer allí usufructuando el soporte dado por etapas de cierta bonanza económica.

Como producto institucional consecuente, los organismos de estado en Tucumán a cargo del manejo de los problemas del agua desde hace medio siglo no generan ideas ni propuestas estratégicas. Se limitan a atender la urgencia, limitados por las estrecheces presupuestarias y organizativas, yendo siempre detrás de las circunstancias y emergencias. Las más importantes son la Dirección de Recursos Hídricos (DRRHH), la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT). Sin dudas, a la luz de los problemas existentes y la incapacidad para afrontarlos, la SAT es la más cuestionable de todas ellas.

Los problemas de abastecimiento de agua a la población son vitales y, obviamente, de mayor sensibilidad en la sociedad. Tucumán, por su estructura productiva agroindustrial, se caracterizó históricamente por tener numerosa población dispersa en su geografía, con significativa población rural. No obstante, en las últimas décadas se produjeron acentuados procesos de migración hacia ciudades que provocaron el crecimiento desordenado y caótico de éstas y la necesidad de abastecer con agua potable y servicios sanitarios a una población rápidamente creciente. La demanda de servicios de agua y cloacas fue acompañada con infraestructura en forma desigual, siendo mejor la respuesta en agua potable que en cloacas. Se llegó en 2009 a un 90,2% de población servida con agua y a un 41,2% con cloacas (informe LED 2010, *“Lineamientos estratégicos para el desarrollo, 2016-2020”*, publicado por la Secretaría de Estado de Planeamiento del Gobierno de la provincia de Tucumán)

Pero lo grave de la realidad fue que el aumento de población servida no significó que ello fuera con buena calidad de servicio. Se construyeron numerosas redes de agua, se conectaron gran cantidad de usuarios nuevos que no tenían agua por red pública, pero la pésima calidad de construcción produjo numerosas fallas y pérdidas de agua. Asimismo, las fuentes de abastecimiento tradicionales resultaron insuficientes (ríos Vipos, embalse El Cadillal, etc.) y las extracciones de agua subterránea se multiplicaron enormemente pero también resultaron insuficientes en períodos de sequías. Del total de agua extraída de ríos y acuíferos subterráneos y enviada a las redes una parte muy importante se pierde por roturas y otra por derroche de los consumidores, que no tienen penalidades por ello y por la lenidad del organismo prestador del servicio (SAT principalmente). En materia de obras nuevas se priorizó abastecer a nuevos sectores y no se invirtió en mejoras en áreas antiguas con redes obsoletas y sobreexigidas por la densificación demográfica. Las consecuencias fueron los frecuentes cortes totales de servicio, la baja presión del suministro y la frecuente mala calidad del agua, contaminada en numerosos puntos de roturas a pesar de producirse en las fuentes de origen agua de calidad aceptable.

Resulta por lo menos extraño que en la última década, en la que se realizaron las mayores inversiones para abastecer con agua potable a la población, los resultados fueran tan magros. En efecto, si se tiene en cuenta que, aunque el grado de cobertura del servicio aumentó sustancialmente, la mala calidad del servicio fue la característica dominante, producto de la pésima ejecución, el pobre mantenimiento de las redes y la mala gestión del organismo público prestador del servicio, la SAT. En materia de cloacas el resultado fue más grave, puesto que la mala calidad en la construcción de las redes se tradujo en permanentes desbordes y afloramientos a la vía pública, creando graves problemas ambientales que no pueden resolverse fácilmente, puesto que no es posible reparar las fallas sino rehaciendo las obras totalmente. La SAT se ha mostrado como un organismo totalmente ineficaz para prestar un servicio de calidad aceptable y es el más cuestionado por la población ante la falta de respuestas a los graves problemas de insuficiencia de agua y desbordes cloacales. Basta leer los reclamos de la población en los medios de comunicación para tener una percepción clara de ello.

Resulta altamente sugerente que un servicio de tanta sensibilidad para la población no haya sido tratado por los gobiernos justicialistas de las últimas décadas con atención y esmero aunque fuera por mero interés electoralista. Probablemente sea una evidencia de la incapacidad de la elite política y la

aristocracia social más ocupada en las luchas inter-facciones por el poder y sin visión sobre los requerimientos de una sociedad verdaderamente desarrollada para prever y manejar los problemas de prestación de servicios básicos para la población y el sistema productivo. El Estado provincial actual, así como los municipios, son cuerpos absolutamente rígidos, mediocres e ineficientes para garantizar tales servicios y acompañar, menos promover, el desarrollo del bienestar y la economía global.

Los daños producidos por las inundaciones configuran otro de los aspectos que evidencian el estigma en que Tucumán se encuentra atrapado. La provincia abarca una superficie reducida de 22.524 km<sup>2</sup> con una pluviosidad importante (600 a 1200 mm/año) atravesada por una red hidrográfica densa que se entrelaza con un territorio fuertemente ocupado por población y explotado por la agricultura. La ocupación tanto agrícola como urbana significó la eliminación de bosques naturales protectores y las consecuencias fueron las inundaciones, tanto las debidas a las aguas pluviales caídas en campos y ciudades y sin manejo, como las producidas por desbordes de ríos que atraviesan o bordean áreas pobladas en las planicies aluviales (Capital, Lules, Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Río Chico).

Este problema es sobre el que se ciernen las más grises predicciones, por diversas razones. En primer lugar, para afrontarlo con eficacia son necesarias planificación, organización y altas inversiones. En segundo lugar, son obras que no atraen a los gobernantes y políticos, por ser de escasa visibilidad y, por ende, de magro rédito electoral. A consecuencia de ello, la evolución de la provincia se dio en el último siglo sin atender los problemas que se iban generando acumulativamente, ni siquiera mediante una planificación preventiva urbana y de los usos del suelo. Las escasas obras de infraestructura surgidas en períodos limitados (por ejemplo de autocracias militares) no fueron mantenidas y sufrieron muy graves deterioros y destrucción, lo que insumirá cuantiosos recursos económicos para evitar su destrucción total y lograr su refuncionalización. Por otra parte, la importancia de la planificación en esa materia no echó raíces en gobernantes ni funcionarios de organismos públicos responsables. Cuando, en situaciones de excepción, se cuenta con planes directores, estos no se respetan o no se tienen en cuenta. Las instituciones urbanizadoras públicas (IPVDU) y los emprendedores inmobiliarios privados escabullen permanentemente la consideración seria de los problemas de manejo de aguas pluviales. El panorama resultante es una problemática compleja y un Estado con multiplicidad de problemas y limitaciones graves para resolverlos, pero, por sobre todas las cosas, falta de convicción y decisión política para afrontarlos.

Lo usual y frecuente es que, ante situaciones de inundaciones, provincia y municipios actúen con planes de emergencia, sin propósitos de mediano y largo plazo. Los problemas de fondo no se resuelven y nuevos problemas se van generando ante el crecimiento desordenado de las ciudades. Las grandes inversiones necesarias no llegan y deben competir con muchas otras necesidades de la sociedad consideradas más prioritarias (empleo, salud, educación, seguridad, etc.).

Estos panoramas críticos descritos para dos de los aspectos más imperiosos del agua en la sociedad llevan inevitablemente a una visión nada optimista sobre el futuro hídrico de la provincia. El ritmo de solución a los problemas es mucho menor que el ritmo de aparición de los naturales problemas del

agua que el crecimiento demográfico y productivo implican, sumados a las crisis acumuladas sin resolver que vienen desde el pasado.

El grueso de la población es víctima de los problemas, pero en parte es responsable por los malos hábitos de derroche de agua. Todos ignoran por dónde pasa la solución de los problemas; pero requieren un servicio de calidad razonable (agua potable, buena presión, cloacas eficientes), sin importarles lo complejo que ello significa y negando el costo real que deberían pagar. Los industriales y agricultores reciben agua de redes públicas pero no son exigentes con la calidad del servicio. Están habituados a que éste, por el cual pagan cánones insignificantes, sea tradicionalmente malo. Por ello recurren a diversos recursos para abastecerse, desde pozos de aguas subterráneas, acequias privadas, bombeos directos desde cauces y otros a veces no santos. Así como las destartaladas redes de riego pierden la mayor parte del agua por infiltraciones, los agricultores, en su mayoría, emplean sistemas de riego muy dispendiosos, de muy baja eficiencia, y los industriales apenas reciclan el agua empleada, contribuyendo al derroche generalizado. Cuando ocurren inundaciones, los reclamos van en múltiples direcciones; las respuestas no pasan del asistencialismo de circunstancia y la envergadura de los problemas hace que cundan promesas mil veces repetidas como escapismo sin esperanzas.

¿Quién es entonces responsable de racionalizar y mejorar los servicios de abastecimiento de agua tanto a la población como a los productores y la protección contra inundaciones? Obviamente los organismos públicos (SAT, DRRHH y DPA fundamentalmente y adicionalmente los municipios en materia de manejo de aguas pluviales urbanas). Pero todas ellas son instituciones viejas, ineficientes, sin dinamismo ni capacidad de respuesta. Los sectores políticos no tienen conciencia de su importancia y de la necesidad de fortalecerlas.

Como ya dijimos, los problemas del agua en Tucumán son complejos y las soluciones frecuentemente escapan a la comprensión del ciudadano común, por tener fuertes componentes técnicas, además de las socioeconómicas más reconocidas. En tal sentido, los organismos responsables deberían tener planteles de técnicos profesionales con nivel adecuado para transmitir hacia la población y hacia los niveles políticos de decisión ideas claras para obrar con racionalidad y con visión estratégica hacia el futuro. También ocurre que los niveles políticos de gobierno están ocupados por funcionarios con bajo nivel de formación para comprender las complejidades de los temas hídricos o, peor aún, con escasa voluntad para ello, ya que sus intereses son meramente de corto plazo y se deben traducir dentro de su período de gobierno (cuatro años). Esa situación crónica en los niveles decisorios de los poderes Ejecutivo y Legislativo ha relegado a los organismos del Estado para el agua a estructuras burocráticas donde los planteles profesionales estables no configuran corrientes de opinión estratégica y la actitud natural es, ante todo, de autopreservación sin contradecir a la conducción jerárquica que viene del Poder Ejecutivo, la cual es, en general también cortoplacista y sin visión estratégica sobre los problemas del agua. A resultas de esa situación, quienes dentro del Estado se presume que están capacitados para pensar y proponer soluciones para los problemas crecientes que se van estableciendo en la sociedad y el sistema productivo, son sectores inhibidos por las reglas de juego de un sistema político de

manejo del Estado que no lo requieren ni lo permiten. En los últimos tiempos resultó llamativo el silencio de los organismos públicos del agua frente a diversos hechos de la realidad que requieren al menos un debate de opiniones y no una mera imposición desde arriba. Y las decisiones provenientes de los niveles altos del Poder Ejecutivo carecen por lo general de sustento racional y son producto de negociaciones políticas con el Poder Ejecutivo nacional en una mesa donde se ponen en juego cuestiones ajenas a la racionalidad de los problemas. A título de ejemplo, el gobierno provincial antepone o se interesa en la creación de fuentes de empleo sin hacer hincapié en el beneficio real que la obra pública en cuestión traerá en forma duradera a la provincia. El ejemplo de la anunciada obra del dique Potrero del Clavillo es un caso elocuente de lo expuesto.

Es de temer que en algún momento los problemas acumulados estallen con efectos devastadores sobre la población, lo que pueda generar reacciones imposibles de manejar políticamente y resolver para un gobierno en particular. En especial, la mala calidad de servicio de agua potable provoca estrés en la población en un modo más generalizado que las inundaciones, que afectan por lo general a menor cantidad de personas, aunque con mucho mayores daños económicos, tanto en lo privado como en lo público. Si ocurriera alguna circunstancia de shock sobre la población, ya fueren graves sequías o inundaciones, que exacerbare los aspectos críticos a un punto de conmoción social, no será posible brindar soluciones rápidas y eficaces puesto que no existen. Ellas surgen sólo de procesos largos y sostenidos de planificación de acciones y obras que toman muchos años y requieren continuidad entre varias administraciones de gobierno.

¿Estamos entonces atrapados en el laberinto de nuestras propias limitaciones? ¿Cuál es la salida?

Este autor ya ha sostenido en diversas expresiones su visión sobre la necesidad de afrontar el futuro del agua en Tucumán partiendo de la creación de una herramienta esencial para ese objetivo cual es la conformación de la Autoridad Única del Agua (**AUA**), reestructurando los organismos actuales para supeditarlos a ella, terminando con los actuales nichos aislados, desconectados y descoordinados, evitando las actuales confrontaciones que expresan meros intereses corporativos intraestatales. Tal órgano superior y los brazos ejecutores deben estructurarse sobre principios de alta jerarquía técnica, con funcionarios y técnicos responsables seleccionados por concurso. A partir de la conformación de la **AUA** se podrá encarar un proceso global de planificación hídrica traducible en un Plan Hídrico Provincial que será la política a desarrollar por sucesivos gobiernos.

Lamentablemente, no hay soluciones rápidas ni fáciles a tantos problemas acumulados. Todas requieren, en primer lugar, poner en juego inteligencia, planificación, organización, y luego, abultados recursos económicos. Todo eso implica tiempo, un par de décadas quizás. No se deben sembrar falsas expectativas en la población. Se debe tener el coraje político de prometer sólo esfuerzos, organización y sudor, pidiendo a la población paciencia y tolerancia. Algo así como aquella famosa expresión de Winston Churchill, primer ministro británico: *"No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor"* utilizada en un histórico discurso ante la Cámara de los Comunes, el 13 de mayo de 1940, a ocho meses de haber comenzado la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas aliadas estaban experimentando continuas derrotas frente a la Alemania nazi. El sudor y el esfuerzo, más la inteligencia

y la organización, deberán estar a cargo de la clase política, los funcionarios de gobierno y los planteles técnicos del Estado.

Como en la psicología, la base de una terapia está en que el paciente tome conciencia de la naturaleza de su crisis. A partir de allí es posible esbozar caminos de salida. Mientras tanto, “está solo y espera”. Estamos atrapados en nuestra propia telaraña, pero obligados a buscar salida.

**Ing. Franklin Adler**

Tucumán, marzo de 2018